

Señor

**JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO - REPARTO
E- S. D.**



REF:- DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: TYRONE ESCOBAR ZORRILLA

DEMANDADO:- LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA.

MARIA CAROLINA RENGIFO RENGIFO, mayor de edad de esta ciudad, abogada en ejercicio, identificada civil y profesionalmente como aparece al r e de mí correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado del señor **TYRONE ESCOBAR ZORRILLA**, mayor de edad y domiciliado en el municipio de Bugalagrande, en virtud de poder que adjunto, con toda consideración me permito interponer ante ese Despacho demanda **DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** en contra de la **NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, representado legalmente por la Ministra de Educación doctora **GINA PARODY D'ECHEONA** o quien haga sus veces al momento de la notificación o a su delegado, para que previo los trámites procesales previstos el C.P.A.C.A., mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, se provea favorablemente a las siguientes:

DESIGNACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162, num., 1º, del C.P.A.C.A, las partes en este proceso son:

PARTE ACTORA;- El demandante señor **TYRONE ESCOBAR ZORRILLA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.198.970 expedida en Bugalagrande, representado por la suscrita apoderada.

LA PARTE DEMANDADA:- La demandada es la **NACION - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** representada legalmente por la señora Ministra doctora **GINA PARODY D'ECHEONA**, o quien haga sus veces el **FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** y la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.**

La siguiente acción la impetramos las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERO:- Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio **20150170023101 de fecha 15 de enero de 2015**, mediante el cual se niega al señor **TYRONE ESCOBAR ZORRILLA**, el reconocimiento de 214 días de sanción moratoria, por la demora injustificada en el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales.



SEGUNDO:- Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecha se le condene a la demandada a reconocer y pagar al señor **TYRONE ESCOBAR ZORRILLA**, la suma de \$39.198 pesos diarios, desde el 21 de enero de 2011 hasta el 23 de agosto de 2011, por concepto de sanción moratoria causada por la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales que solicito el 15 de octubre de 2010, suma que asciende a \$8.388.450,oo.

TERCERO:- Que se ordene el pago de las sumas que resulten a favor de mi poderdante debidamente indexadas.

CUARTO:- Que se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.).

QUINTO:- Se condene en costas a la demandada.

HECHOS

PRIMERO: El señor **TYRONE ESCOBAR ZORRILLA**, docente **DEPARTAMENTAL**, solicitó a la **NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, que efectuara el reconocimiento y pago de sus **CESANTÍAS DEFINITIVAS**; solicitud que tal como corista en la resolución, fue radicada bajo el número **33325** de fecha **15/10/2010**, tal y como consta en la plurimencionada resolución.

SEGUNDO.- Por medio ele la Resolución **2779** de fecha siete (07) de diciembre de dos mil diez (2010), el **FONDE DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, reconoció y ordenó el pago a favor de la ejecutante por concepto de cesantía definitivas por los servicios prestados como docente por la suma de **TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$3.044.825,oo).**

TERCERO: El pago de la cesantía reconocida, fue cancelado sólo hasta el veintitrés (23) de agosto de dos mil once (2011), por intermedio de la Fiduciaria LA PREVISORA S.A., a través del BANCO BBVA.

CUARTO: El salario base de liquidación con el cual fueron liquidadas las cesantías definitivas del señor **TYRONE ESCOBAR ZORRILLA** fue de **UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS (\$1.175.951,oo)** tal y como consta en la Resolución No. **2779** de fecha siete (07) de diciembre de dos mil diez (2010).

QUINTO:- La demora injustificada en el reconocimiento y pago de las cesantías de mi poderdante, ha causado así una sanción moratoria desde 21 de enero de 2011, para un total de 214 días de mora, por valor de \$8.388.450.oo, según la siguiente liquidación:

NOMBRE	SALARIO	RADICACION	PLAZO	FECHA DE PAGO	DIAS A LIQUIDAR	VALOR DIARIO	VALOR INDEMNIZACION
TYRONE ESCOBAR	\$ 1.175.951	15/10/2010	21/01/2011	23/08/2011	214	\$ 39.198	\$ 8.388.450
TOTAL							\$ 8.388.450



SEXTO:- Se agotó el trámite de reclamación administrativa, ante la Secretaría de Educación Departamental de Cali, mediante oficio enviado por correo certificado el 14 de noviembre de 2014 y recibido por la secretaria de Educación el 19 de noviembre de 2014, bajo el No. radicado bajo el número 20140321015002, petición que fue negada mediante oficio No. **20150170023101** de fecha 15 de enero de 2015.

SEPTIMO:- Se agotó el trámite de la conciliación prejudicial, siendo esta declarada fallida por parte de la Procuraduría No. 18 Judicial II en Lo Administrativo de Cali, según certificación de fecha 09 de junio de 2015.

1.- DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS

- Ley 91 de 1989 artículos 5 y 15; ley 244 de 1995 artículos 1 y 2 y la ley 1071 de 2006 artículos 4 y 5.

I. CONCEPTO DE LA VIOLACION

El pago de las Cesantías de los docentes afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, siempre han estado menoscabando las disposiciones que regulan la materia, incurriendo en mora injustificada para el pago de la prestación, contrario al pago de las cesantías de los demás servidores del estado, que al momento de solicitarlas están siendo canceladas a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su solicitud, por tratarse de emolumentos salariales que retiene el patrono, pero que son del empleado, para cuando este quede CESANTE en su actividad.

En virtud de estas circunstancias, fueron expedidas de manera progresiva la ley 244 de 1995 y la ley 1071 de 2006, mediante las cuales, se reguló la situación particular del pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, estableciendo un término perentorio para el reconocimiento de las mismas de 15 días después de radicada la solicitud y 45 días para proceder al pago, después de expedido el acto administrativo de reconocimiento.

Sin embargo, esta circunstancia y muy a pesar de que la jurisprudencia ha establecido que la disposición normativa ha de entenderse que entre el reconocimiento y pago no se deben superar los 65 días hábiles después de haber radicado la solicitud, el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, cancela por fuera de los términos establecidos en la ley, lo que genera una SANCION para la entidad, equivalente a un (1) día de salario del docente por cada día de retardo, con posterioridad a los 65 días hábiles después de haber radicado la solicitud, contado hasta cuando se efectúe el pago de esta cesantías.

NORMATIVA APLICABLE EN EL CASO CONCRETO:

- Ley 91 de 1989, artículo 2, numeral 5:

"....Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente ley, son de cargo der la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el fondo Nacional del Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagaran al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles" .

En estas circunstancias, puede observarse que mi representada tiene la calidad de Nacionalizada y la prestación fue reconocida con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 91 de 1989, situación por la que la SANCION MORATORIA deprecada, está a cargo de la entidad demandada y está obligada a responder por esta situación irregular.

LEY 244 DE 1995

La ley 244 de 1995, en sus artículos 1 y 2 ya habían determinado el derecho para mí representada así:

"Artículo 1: Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad

Carrera 3ª No. 8-39 Oficina X-1 Edificio escorial Teléfono 3143641835 – 3118601654 Ibagué

empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley”.



Artículo 2: La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del Servidor Público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional del Ahorro.

PARAGRAFO: En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario **un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo.**” (Subrayado fuera del texto).

A pesar de que esta norma fue sustituida por la Ley 1071 de 2006, es claro que la intención del legislador, fue buscar que una vez el empleado quedara cesante en su empleo, pudiera tener unos recursos rápidos para mitigar la ostensible rebaja de sus ingresos al retirarse o perder su trabajo. Inicialmente la sanción sólo hacía referencia a las CESANTÍAS DEFINITIVAS, pero con la entrada en vigencia de la Ley 1071 de 2006, la protección de que el trabajador pudiera obtener su pago de la cesantía antes de los 65 días después de radicada la solicitud y fue ampliada a la cesantía parcial por medio de la Ley 1071 de 2006, ya era un imperativo legal que la entidad demandada pretende desconocer.

LEY 1071 DE 2006

El artículo 4 de la ley 1071 de 2006 estableció:

“TERMINOS. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley”

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. “(Negrillas y subrayas fuera de texto).

El artículo 5 ibídem por su parte contemplo:

“Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional del Ahorro.

En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, **la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,** para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En estas circunstancias, obsérvese que el espíritu garantista de la ley 1071 de 2006, al establecer los términos perentorios para el reconocimiento y pago de las cesantías de mi mandante, está siendo burlada por la entidad demandada, pues se encuentra cancelando la prestación, con posterioridad a los sesenta y cinco (65) días después de haber realizado la petición de las mismas, evadiendo la protección de los Derechos del Trabajador, haciéndose el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio acreedor a la SANCION correspondiente por la Mora en el pago de las CESANTIAS por el incumplimiento o retardo en el pago de la misma y con esta circunstancia pueda resarcirse los daños que causó a mi mandante, situación que debe ser oportunamente protegida por este despacho.

Es así que las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 al establecer un término perentorio para la liquidación de la cesantía buscó que la administración expidiera la resolución en forma inoportuna, evitando que la autoridad demorara su respuesta, pretendiendo así evadir la acción de la justicia.

Carrera 3ª No. 8-39 Oficina X-1 Edificio escorial Teléfono 3143641835 – 3118601654 Ibagué



La contabilización adicional de los 5 días, a los 60 días que contempla la ley 1071 de 2006, con el objeto de agotar el procedimiento del reconocimiento y pago de las cesantías, obedece a la necesidad de contabilizar el término necesario para que el acto administrativo que reconoció la prestación, quede debidamente ejecutoriado conforme lo establece la ley.

Conforme a lo anterior se puede vislumbrar que es el mismo Estado, quien visualizaba la burla que las entidades públicas encargadas del reconocimiento de la cesantía, daban a sus empleados; situación que pretendió remediar, pero como lo puede observar el despacho: "hecha la ley, hecha la trampa", pues lo que hicieron las entidades fue incluso demorar más la incertidumbre del reconocimiento de las mismas y sólo cancelar cuando los recursos pudieran eventualmente tramitarlos, con el objetivo de evitarse la sanción por mora, pero el H. Consejo de Estado encontró en esto, una situación tan irregular que en multiplicidad de pronunciamientos, ya explicó la formula como deben computarse esos términos para comenzar a causarse la sanción por mora solicitada en esta oportunidad, lo que le significa señor Juez, que debe accederse a las suplicas de la demanda.

JURISPRUDENCIA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO

El Honorable Consejo de Estado, en multiplicidad de oportunidades se ha pronunciado sobre la manera como debe entenderse la disposición normativa. En sentencia Unificadora del 27 de marzo de 2007, M.P. Jesús María Lemos Bustamante, consigno: **(Sala Plena de lo Contencioso Administrativo-Unificando Jurisprudencia- El H. Consejo de Estado el 27 de marzo de 2007 expediente Radicado 2777-2007; SU 02513 M.P. DR. Jesús María Lemos Bustamante).**

"... Cuando la administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radica la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, mas cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedido con la salvedad a que aduce el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedo en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causara la sanción moratoria.

Para la Sala resulta claro que ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la forma indicada para que la norma tenga efecto útil y hacer efectiva la capacidad conminatoria de la sanción prevista por la ley 244 de 1995, pues de no acudir a este medio, el cometido proteccionista de los derechos del Servidor Público que animó a la ley, **se vería paradójicamente burlado por la propia ley dado que la administración simplemente se abstendría de proferir la resolución de reconocimiento de las Cesantías definitivas para no poner en marcha el termino para contabilizar la sanción, produciéndose un efecto perverso con una medida instituida para proteger al ex servidor público cesante.**" (subrayado fuera del texto).

Así, el término con el que cuenta la administración para efectuar el pago efectivo del auxilio de cesantías es de sesenta y cinco (65) días hábiles siguientes al día de la presentación de la solicitud de reconocimiento. Este término comprende quince (15) días hábiles para expedir la resolución de liquidación de las cesantías definitivas, cinco (5) días hábiles de su ejecutoria y cuarenta y cinco (45) días hábiles para efectuar el pago de la prestación social.

No se compadece en el sentido de la normatividad mencionada que la indemnización por la falta de pago oportuno de cesantías se genere solo ante el incumplimiento del término de 45 días contados a partir del momento en que se encuentre en firme el acto administrativo que la reconozca, porque se dejaría desamparado al ex servidor en el evento en que la administración tarde más de los 15 días para expedirlo.

Sentencia del 8 de abril de 2008 Magistrado Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve- Expediente Rad. 73001-23-31-000-2004-01302-02:

"...La indemnización moratoria de que trata la ley 244 de 1995 es una sanción a cargo del empleador moroso ya a favor del trabajador, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago del al liquidación definitiva del auxilio de cesantías en los términos de la mencionada ley. El espíritu de la comentada disposición es proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías, En tal sentido estableció el procedimiento para su



reconocimiento y pago, consagrando entre otros asuntos, una sanción a cargo de la administración y a favor del trabajador, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, en caso de constituirse retardo en el pago definitivo de la referida prestación.

La sanción moratoria se contabiliza a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas, vale decir, cuando no se interpongan recursos contra el mismo, cuando se renuncie expresamente a ellos o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (art. 65 del C.C.A.). En los eventos en que la administración no se pronuncie o se pronuncie tardíamente frente a la solicitud del pago del auxilio de cesantía, dicha situación, salvo los casos previstos por la ley para su retención, no la exime de la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retraso.”

“La Sala ha venido expresando que para lograr la efectividad de la previsión normativa contemplada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 el momento en el cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas **en los eventos en que no exista acto de reconocimiento** debe contabilizarse en la siguiente forma:

Se toma la fecha en que el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas con los anexos que corresponda. Desde esa fecha deben computarse, conforme a los términos a los que alude la Ley 244 de 1995, quince (15) días hábiles para “expedir la resolución correspondiente” de la liquidación de las cesantías definitivas, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha en la cual haya quedado en firme dicha resolución, para efectuar el pago de la prestación social. Esto implica que deben contabilizarse en total 60 días hábiles a partir de la petición, más el término de la ejecutoria de la resolución correspondiente, que ordinariamente corresponde a cinco (05) días hábiles, para un gran total de sesenta y cinco (65) días hábiles.

En conclusión cuando la entidad no se pronuncie frente a la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, el término para el cálculo de la indemnización moratoria comenzará a computarse a partir del día siguiente a los sesenta y cinco (65) días hábiles posteriores a la radicación de la petición de cesantías definitivas que obviamente debe ser posterior al retiro” (negrillas y subrayado mías).

Sentencia del 26 de marzo de 2009 dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Lácides Moscote Amaya contra el Departamento de la Guajira, radicación 2003-00654, siendo ponente la Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez, donde al abordarse una situación de similares circunstancias, se refirió a lo siguiente:

“....Acción procedente para reclamar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía definitiva.

“El Consejo de Estado, Sala Plena de lo contenciosos administrativo, en sentencia del 27 de marzo de 2007, expediente 2777-2004 M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante se ocupó del tema así:

“(…) 5.3. Formulación de las distintas hipótesis para el reconocimiento de la indemnización moratoria por falta de pago oportuno de las cesantías definitivas. (...)

Conforme al texto de la norma se presentan varias hipótesis, a partir de la petición del interesado, que pueden dar lugar a la existencia de un conflicto así:

5.3.1. La administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías.

5.3.2. La administración no reconoce las cesantías y por ende no las paga.

5.3.3 La administración efectúa el reconocimiento de las cesantías.

En este caso pueden ocurrir varias posibilidades:

5.3.3.1. Las reconoce oportunamente pero no las paga.

5.3.3.2. Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente.

5.3.3.3. Las reconoce extemporáneamente y no las paga.

5.3.3.4. Las reconoce extemporáneamente y las paga tardíamente.

5.3.4 Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido.

En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido del derecho la sala considera que la acción procedente es la nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón a que el origen de la suma adeudada es una acreencia laboral.

En la hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que en principio, podrían constituir un

título ejecutivo complejo de carácter laboral, el interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria para obtener el pago mediante la acción ejecutiva. Vgr hipótesis 5.3.3.1 y 5.3.3.2. (...) .



En suma la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que exista certeza del derecho y la sanción. Porque, se repite, en esos eventos procede la ejecución del título complejo. (...).

En conclusión:

1. El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas puede ser controvertido, cuando el administrado no está de acuerdo con la liquidación, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
2. Ese mismo acto constituye título ejecutivo y puede ser reclamado por la vía judicial correspondiente, que es la acción ejecutiva, pero en lo que respecta a la sanción moratoria deberá demostrarse, además que no se ha pagado o que se pagó en forma tardía.
3. El acto de reconocimiento de la sanción moratoria puede ser cuestionado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si el administrado se encuentra inconforme con el, pero si hay acuerdo sobre su contenido y no se produce el pago de la sanción la vía indicada es la acción ejecutiva.
4. Cuando se suscite discusión sobre algunos de los elementos que conforman el título ejecutivo, como que no sean claros expresos y exigibles, debe acudirse ante la jurisdicción para que defina el tema. De lo contrario la obligación puede ser ejecutada ante la jurisdicción ordinaria por la acción pertinente.

Conviene precisar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de las cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los actos fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse es la de la nulidad y restablecimiento del derecho.(....)".

Así las cosas, la vía judicial adecuada para reclamar el reconocimiento y pago de la cesantía definitiva y la sanción moratoria consagrada en el artículo 2 de la ley 244 de 1995, es la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, dado que no existe título ejecutivo.

Con esta acción, tal y como lo ha sostenido la Jurisprudencia, se busca la protección de un interés particular, con la finalidad de obtener el resarcimiento de un perjuicio causado con el acto cuya nulidad se pretende, es decir que se encuentra legitimado para instaurar esta acción toda persona a quien se le vulnere un derecho protegido por el ordenamiento jurídico a través de un acto administrativo que afecte un derecho en particular.

Así las cosas, y tomado como marco de referencia el anterior pronunciamiento, es que le asiste razón a mi mandante para proceder por esta jurisdicción de lo contencioso administrativo a solicitar a través de la presente convocatoria el pago de las acreencias prestacionales que le fueron reconocidas con la resolución **2779** de fecha siete (07) de diciembre de dos mil diez (2010), **expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca**, en lo que tiene que ver al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de tal obligación como en efecto lo establece el artículo 2 de la ley 244 de 1995.

La misma corporación, el 30 de julio de 2009, con ponencia del Dr. Victor Hernando Alvarado Ardila, dentro del expediente radicado 73012331000200100006-01 reiteró:

"...El momento a partir del cual se cuenta el plazo legal referido en las normas transcritas es el de la fecha de solicitud de reconocimiento por parte del interesado, tal como lo ha establecido esa corporación en reiteradas oportunidades:

Conforme al artículo 1 de la ley 244 de 1995 la entidad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de Cesantías Definitivas, están obligadas a expedir la respectiva resolución y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la misma ley tiene un plazo de máximo de 45 días a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo para cancelar la prestación. En este caso el demandante solicita que se declare el silencio administrativo negativo

frente a su petición el 9 de marzo de 1999 es decir que esta es la fecha que puede tomarse para efecto de contabilizar la aplicación de los artículos 1 y 2 de la ley 244 de 1995(...).



Así, el término con el que cuenta la administración para efectuar el pago efectivo del auxilio de cesantías es de sesenta y cinco (65) días hábiles siguientes al día de la presentación de la solicitud de su reconocimiento. Este término comprende quince (15) días hábiles para expedir la Resolución de Liquidación de las Cesantías, cinco (5) días hábiles de su ejecutoria y cuarenta y cinco (45) días hábiles para efectuar el pago de la prestación social.....” .

Iguales criterios fueron plasmados por la máxima autoridad de la Justicia Administrativa en las siguientes providencias: Diciembre 7 de 2000 Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección segunda- Subsección A, Consejero Ponente Dr. Alberto Arango Mantilla- actor José Ever Rodríguez Barrero-Rad 2020-00; y Diciembre 12 de 2002 Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección segunda- Subsección B, Consejero Ponente Dr. Jesús María Lemos Bustamante, actor –Beatriz Cuberos de Coronel –Rad 1604-01.

Dada la claridad de las normas legales que sirven de fundamento a esta demanda y el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el tema, no deja duda del derecho que le asiste a mi mandante, debiéndose atender de manera favorable las pretensiones de la demanda.

PRUEBAS

PRIMERO:- Copia de la Resolución **2779** de fecha siete (07) de diciembre de dos mil diez (2010), en la cual consta la fecha de radicación de la solicitud del anticipo de las cesantías canceladas tardíamente y el salario base de liquidación de las mismas.

SEGUNDO:- Recibo de Pago expedida por el Banco BBVA, en la cual consta la fecha exacta del pago.

TERCERO:- Solicitud agotamiento vía gubernativa de fecha 14 de noviembre de 2014, sobre el pago de sanción moratoria.

CUARTO:- Oficio **20150170023101** de fecha 15 de enero de 2015.

QUINTO:- Solicitud conciliación ante la Procuraduría.

SEXTO:- Certificación expedida por la Procuraduría 18 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali, de fecha 09 de junio de 2015.

SEPTIMO:- CD.

1. DETERMINACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA

De acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 162 del C.C.A., y de conformidad con la resolución **2779** de fecha siete (07) de diciembre de dos mil diez (2010)), donde viene relacionado el salario base para liquidar las cesantías, estimo el razonamiento de la cuantía de esta demanda en la suma de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$8.388.450,00).**

NOMBRE	SALARIO	RADICACION	PLAZO	FECHA DE PAGO	DIAS A LIQUIDAR	VALOR DIARIO	VALOR INDEMNIZACION
TYRONE ESCOBAR	\$ 1.175.951	15/10/2010	21/01/2011	23/08/2011	214	\$ 39.198	\$ 8.388.450
TOTAL							\$ 8.388.450

CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA ACCEDER A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA



Se agotó el trámite de reclamación administrativa, ante la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, mediante oficio enviado por correo certificado el 14 de noviembre de 2014 y recibido por la secretaria de Educación el 19 de noviembre de 2014, bajo el No. radicado bajo el número 20140321015002, petición que fue negada mediante oficio No. **20150170023101** de fecha 15 de enero de 2015 y se llevó a cabo el trámite de la conciliación prejudicial, siendo esta declarada fallida por falta de ánimo conciliatorio de la demandada, cuya certificación fue excedida el 09 de junio de 2015, por parte de la Procuraduría No. 18 Judicial II Administrativa de Cali.

ANEXOS:

- a. Poder legalmente conferido para actuar.
- b. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- c. Copia de la demanda para los traslados a la parte demandada.

NOTIFICACIONES:

1. - Mi poderdante en la Institución Educativa Antonio Nariño del Municipio de Bugalagrande Valle.
2. - La suscrita Apoderada Judicial; Carrera 3 No. 8- 39, edificio El Escorial, Oficina X-1 de la ciudad de Ibagué. Teléfono; 314-3641835, y correo electrónico mariacarolinarengifo@hotmail.com
- 3.- La señora Ministra la Calle 43 No. 57 – 14 CAN Bogotá, y dirección electrónica en notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
- 4.- La Secretaria de Educación Departamental del Valle del Cauca en la calle 10 Carrera 9 Palacio San Francisco de Cali Valle, Correo electrónico despachoseceduccion@valledelcauca.gov.co
- 5.- La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, en la carrera 7ª No. 75-66 Pisos 2 y 3 de Bogotá y/o correo electrónico Buzonjudicial@defensajuridica.gov.co.
- 6.- La Procuraduría No. 18 Judicial II para asuntos Administrativos de Cali, en la Calle 11 No. 5 – 54 de Cali Valle.

Atentamente,

MARÍA CAROLINA RENGIFO RENGIFO

C.C. 65784.867 de Ibagué

T.P. 176.442 del C. S. de la J.